

El accionar de los mexicanos requiere de una base social organizada y conciente

¿Nuevamente la *guerra sucia*?

- Contradictorio y vacilante, el gobierno federal hace más borrosos a los hechos.
- “Cortina de humo” y “versión inventada” le llama la socialdemocracia del PRD.
- La inteligencia militar “confirma” la autoría del EPR e involucra a la APPO y al sindicato.
- Resurgimiento de la guerra sucia, la base del reclamo del EPR. ¿Es suficiente?

¿El guión de la privatización?

Julio Hernández (en *La Jornada* 11 jul 2007) comentó, en *Astillero*, que “*Fuese auténtica*, o producto de una infiltración o manipulación, la declaratoria de guerra del EPR hace daño al proceso de lucha contra una derecha que busca la violencia para tratar de justificar sus acciones. Si el mencionado Ejército Popular Revolucionario fuese en verdad el autor del comunicado en que habla de iniciar una “campana nacional de hostigamiento contra la oligarquía y el gobierno ilegítimo”, sería necesario que reconsiderara esa postura, puesto que a partir de ella habrá persecución y castigo a ciudadanos sin implicaciones con la violencia, cuyo único delito será participar en movimientos de izquierda o liberales”.

También señaló que “*Tocar a Petróleos Mexicanos* en estos momentos es, además, una forma de generar desasosiego social respecto del control estatal de esa industria. Una manera de dar tranquilidad a pobladores inquietos podría ser la apertura a capitales que con criterios de eficacia y modernidad sustituyan los esquemas corruptos y peligrosos de manejo burocrático”.

En su columna advirtió que “pronto estará sobre la mesa el gran negocio de la privatización en materia de energéticos. *Naturalmente -así va el guión-*”, escribió.

¿Fue o no el EPR?

Una vez conocidas la demanda del EPR, de inmediato, el gobierno estatal de Oaxaca se apresuró a señalar que “ninguna corporación policiaca del gobierno de Oaxaca tiene detenidos a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Bravo), presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como asegura esta organización en sus comunicados, informó hoy Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana” (Vélez O. en *La Jornada* 11 jul 2007).

Sin embargo, el gobierno de Oaxaca tomó medidas asimismo apresuradas. “Con apoyo del Ejército Mexicano, agregó, se instalaron retenes en los accesos carreteros a la capital del estado, además de realizar *operativos* en el centro histórico, centros comerciales, mercados, terminales de autobuses, así como barrios, colonias, fraccionamientos y municipios conurbanos a la ciudad, “ante cualquier eventualidad”.

Adicionalmente, “las policías y el Ejército han establecido retenes y realizan recorridos en las carreteras federales y estatales que comunican la entidad con los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Las policías oaxaqueñas tienen “el suficiente estado de fuerza” para hacer frente a este tipo de circunstancias. Estamos preparados”, reiteró el funcionario oaxaqueño.

En la capital, el gobierno de Calderón, sin referirse al EPR, calificó los "ataques" contra las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) de "conducta criminal" para debilitar las instituciones democráticas, el patrimonio de los mexicanos y la seguridad de sus familias. El Ejército, la Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública Federal movilizaron a más de 18 mil efectivos para fortalecer la vigilancia de las instalaciones estratégicas del país.

Los servicios de inteligencia del Ejército federal y la Armada ahora dijeron que "no se tenía la certeza de que los incidentes fueran obra del grupo guerrillero". Señalaron que "Quien asegure que fue un grupo determinado el que ocasionó los siniestros se está adelantando. El EPR no actúa de esa forma, sabemos que lo hacen de manera directa en contra de las fuerzas de seguridad" y agregaron que se investigaba "la posibilidad de que, más que un atentado, los incidentes sean producto de un sabotaje" (sic) (Aranda J., Herrera C. en *La Jornada* 11 jul 2007).

El mismo día, 10 de julio, el EPR dio a conocer un nuevo comunicado en el que reitera "haber perpetrado los atentados en ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en los estados de Guanajuato y Querétaro". Asimismo, el EPR denunció que "en los últimos meses la práctica gubernamental de la desaparición forzada de luchadores sociales ha cobrado nuevas víctimas en Oaxaca, estado de México y Guerrero, constituyendo una política de Estado" y reiteró la exigencia de "libertad inmediata a Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo, detenidos-desaparecidos desde el pasado 25 de mayo en el estado de Oaxaca". Luego, convocaron "a todas las organizaciones "revolucionarias y clandestinas" a sumarse a las "acciones de hostigamiento" para exigir la libertad de todos los presos políticos y de los detenidos-desaparecidos en el país, ante la "imposición de un gobierno ilegítimo y la violencia de éste" (Fuente: *La Jornada* 11 jul 2007).

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que contaba con "indicios" de que el estallido de los ductos "habría sido provocada por un artefacto explosivo" (sic) pero que no contaba "con pruebas plenas para determinar que ese "grupo subversivo" haya sido responsable de las explosiones". Entre tanto, se informó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) asumió la investigación del caso.

El 12 de julio, en Campeche, el titular de la PGR confirmó que las cuatro explosiones ocurridas en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro fueron provocadas por explosivos "elaborados deliberadamente" (sic) (Chim L., Méndez A. en *La jornada* 13 jul 2007). Eduardo Medina Mora reiteró que la PGR todavía no contaba con elementos probatorios suficientes para determinar la autoría de los hechos.

¿Cortina de humo?

Los legisladores del PRI condenaron las acciones atribuidas al EPR. Carlos Navarrete, senador del PRD; calificó de "cortina de humo" que el EPR se adjudicara los bombazos en ductos de Pemex. Se trata, dijo, de una estrategia para "bajar" el escándalo desatado por las declaraciones de Zhenli Ye Gon, quien atribuye al PAN la propiedad de los 205 millones de dólares que le incautaron.

Luego, el 12 de julio, AMLO repudió la violencia y acusó a Felipe Calderón de inventar la versión sobre bombazos contra los gasoductos de Pemex para "desviar la atención" y "tender una cortina de humo" en torno a las revelaciones del empresario Zhenli Ye Gon" (Becerril A. en *La Jornada* 13 jul 2007). AMLO comentó que "Me llamó la atención el informe inicial de Petróleos Mexicanos, en el cual se habló de un accidente producto de la falta de mantenimiento en ductos e instalaciones, pero se dio a conocer luego un supuesto comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que el gobierno hizo suyo de inmediato". Luego, agregó, que no le cree al pelele de Calderón y que "el gobierno "del pelele" busca ahora centrar la atención en supuestos bombazos contra las instalaciones de Pemex".

Una tesis similar sugirió es día L.J. Garrido (en *La Jornada* 13 jul 2007).

El 14 de julio, Alejandro Alcocer, senador del PAN trató de implicar veladamente a AMLO basado en que el comunicado del EPR "hace alusión al gobierno "ilegítimo". En respuesta el senador Graco Ramírez (PRD) pidió "dejar en claro si la autoría es de un grupo guerrillero o es una provocación *montada* por el propio gobierno". El mismo legislador declaró que "fallaron los órganos de inteligencia policial y militar" (sic).

La apreciación del PAN es, a todas luces, provocadora; la del PRD es muy limitada y, en todo caso, convendría precisar políticamente las afirmaciones pues sería algo muy grave.

¿Otra etapa de guerra sucia?

Para el escritor Carlos Montemayor, a quien se considera especialista en movimientos guerrilleros, la presión política del EPR no debe sorprender porque “se trata de las consecuencias del resurgimiento de la *guerra sucia* en el gobierno mexicano” (Mateos M. en *La Jornada* 11 jul 2007). El escritor señaló que “no estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de vidas humanas”.

“El terrorismo es un concepto utilitario de descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular, a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación populares.

“La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos 'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social que se oponen a esta pseudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el mundo al revés”.

Respecto a las reivindicaciones del EPR, Montemayor señaló que “Desde el 25 de mayo se filtró en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

“Las filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de

la *guerra sucia* de los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el resurgimiento de la *guerra sucia*”.

Montemayor agregó que “la descomposición política y social, así como en el retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el país entre las elites poderosas y las grandes mayorías desprotegidas “está incubándose un proceso de inconformidad social que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años” y concluyó señalando que “la presencia de este comunicado del EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la paraestatal”.

La versión de la inteligencia militar

El 11 de julio, PEMEX informó que “a las 20:00 horas de ayer quedó totalmente extinguido el fuego en la caseta de válvulas de seccionamiento, ubicada en el municipio de Coroneo, Querétaro”. También informó de la normalización del abasto de gas natural, gas licuado, gasolinas y diesel. Asimismo, se dijo, que se habían incrementado los celajes aéreos y terrestres y que “la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Federal Preventiva (PFP) y Petróleos Mexicanos están trabajando de manera coordinada para reforzar la seguridad en los centros estratégicos”.

El 13 de julio, “Los órganos de inteligencia del Ejército y de la Armada de México confirmaron que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) fue autor de los recientes ataques a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro” (Aranda J., en *La Jornada* 13 jul 2007).

No nada más, esas fuentes agregaron que “los órganos de seguridad consideran tres principales líneas de investigación: que el EPR sea autor único de los atentados; que haya existido colaboración entre ese grupo y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y que elementos radicales pertenecientes al sindicato de Pemex ayudaran al grupo guerrillero”.

Los informantes reconocieron que aún no se explican ciertos detalles sobre los *operativos* de los eperristas que los llevaron a sabotear las instalaciones petroleras y admitieron que las acciones guerrilleras tomaron por sorpresa a los órganos de inteligencia militar y naval.

“En primer lugar, comentaron, está el hecho de que el EPR no tiene presencia reconocida en el

centro del país y de alguna manera rompió con su actuar tradicional, que era el de enfrentar o atacar a fuerzas policiacas o militares, particularmente en Guerrero y Oaxaca.

“Tampoco hay una respuesta definida sobre el cambio de estrategia, al pasar del ataque a “objetivos enemigos” a centrar directamente sus acciones contra instalaciones estratégicas, lo cual genera importantes perjuicios económicos.

“De acuerdo con la visión de inteligencia militar y naval, la posibilidad de que el EPR haya actuado solo, sobre todo a partir de la ruptura interna que derivó en la creación de la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), daría una lectura de los hechos de que este movimiento mantiene su independencia respecto a otros grupos armados, así como la radicalización de sus ideas”.

Respecto a la posibilidad de que existiera un nexo entre el EPR y la APPO, ésta no sería la primera vez en la que los órganos de seguridad del Estado pretenden involucrar al movimiento social oaxaqueño con la guerrilla.

“La línea de investigación sobre la presunta participación de elementos “radicales” del sindicato de Pemex con los eperristas se fundamenta, básicamente, en la forma precisa en que se dieron las explosiones y el necesario conocimiento previo de las instalaciones por personal especializado.

“Al respecto, se dijo que no se descarta la posibilidad de que personal sindicalizado que no está de acuerdo con la política gubernamental, que busca una participación mayoritaria de la iniciativa privada en la paraestatal, haya colaborado con el EPR.

“A pesar del seguimiento dado al EPR desde hace tiempo, los entrevistados aceptaron que las explosiones ocurridas en Guanajuato y Querétaro tomaron por sorpresa a los órganos de inteligencia del Ejército y la Armada”.

Evaluación de la significación política

Enseguida de las explosiones de Querétaro, los cuerpos represivos del Estado se dedicaron a buscar presuntos responsables entre la población civil, específicamente, de las agrupaciones políticas de izquierda. La Asamblea de Pueblos de Oaxaca (APPO) y el Frente Popular Revolucionario (FPR) se deslindaron de cualquier vínculo con el EPR. Anteriormente, el 10 de junio, dos compañeros de ambas organizaciones habían sido detenidos en

Querétaro. Más tarde, el 17 de julio, interpusieron una queja ante al Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese día, el compañero del FPR, quien es maestro afiliado a la CNTE, denunció que continuaba el acoso de la PGR para tratar de vincularlos con el EPR y que existían 13 órdenes de aprehensión contra militantes de su organización.

Continuando con sus apreciaciones, Carlos Montemayor (en *La Jornada* 14 jul 2007) señaló que la visión del Estado “reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.

“El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.

“Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la *guerra sucia*: la desaparición forzada de personas.

Al siguiente día, Montemayor hizo referencia a “alianza del PROCUP con el Partido de los Pobres (PDLP) y en la posterior conversión del PROCUP-PDLP en el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que constituyó el primer gran ensayo de coordinación nacional guerrillera en México” y señaló:

“Los recientes atentados con explosivos en instalaciones de Pemex representan, pues, una demostración de la continuidad histórica de los elementos iniciales de la Unión del Pueblo y tienen como antecedente el atentado de 1994 con explosivos al oleoducto de Petróleos Mexicanos en Tula, Hidalgo. Revelan, por otra parte, objetivos precisos del EPR: primero, no provocar muertes de seres humanos; segundo, afectar solamente

instalaciones estratégicas; tercero, afectar tales instalaciones porque Pemex constituye ya, desde hace al menos cuatro administraciones federales, un coto de interés "oligárquico" sometido a la extorsión fiscal, la corrupción y la privatización quizás irreversible.

“Los atentados revelan otro dato adicional. Independientemente de que las acciones fueron realizadas en Querétaro y Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que realizarse con una asesoría técnica relevante para sólo dañar instalaciones en puntos estratégicos y no provocar daños en vidas humanas. A este asesoramiento técnico quizás se refiere el párrafo del comunicado del EPR "contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado.

“Por otra parte, y por último, debemos señalar que uno de los efectos más sobresalientes de los atentados del EPR fue la inesperada reconversión de Pemex en un "patrimonio de todos los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que tiende a su desaparición total como empresa pública. Suficientes indicadores fiscales, financieros y comerciales hacen parecer inminente la privatización total de Petróleos. Su empleo como fondo revolvente para el gasto del gobierno federal, su aprovechamiento partidista, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción constante están convirtiendo a esta empresa en algo ajeno al desarrollo industrial y tecnológico del país. En este contexto, no carece de sentido la advertencia del comunicado del EPR: "la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la perspectiva del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un "patrimonio de todos los mexicanos" y se ha convertido en uno de los "intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo".

“Un efecto más de los atentados no es tan visible: los socios, coinversionistas o compradores presentes, inmediatos o potenciales, verán con otros ojos las condiciones de seguridad de Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de ciertos sectores de la industria de la guerra que cuentan con ejércitos privados o con asistencia tecnológica y de seguridad en diversas regiones de Asia central, Medio Oriente y África. Esto facilitaría un mayor doblegamiento a los criterios

estadunidenses de seguridad hemisférica que transforma a los ejércitos nacionales en fuerzas de complemento y con funciones policiales regionales. Tal industria de ejércitos privados que pueden asumir, con el carácter de apoyo técnico especializado, la seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e instalaciones diversas del sector petrolero, podría abaratar la privatización de Pemex o favorecer una coordinación binacional en los planes de seguridad "antiterrorista" que ahora importa tanto al gobierno de Estados Unidos”.

El 23 de julio, en Querétaro, Montemayor reiteró su tesis. Expresó que “en el caso de los luchadores sociales, el gobierno mexicano opta por desaparecerlos, torturarlos y matarlos. Esta es una *guerra sucia*, una ilegalidad. Representa la abolición del estado de derecho y, por tanto, causa y motivo preciso y concreto de los atentados del EPR” (Chávez M. en *La Jornada* 24 jul 2007).

Evaluar la responsabilidad política

De acuerdo a lo expresado por Montemayor no habría duda: el EPR fue el autor de las explosiones en PEMEX. Hay razones políticas suficientes para que el malestar de ciertos sectores del pueblo de México se manifieste en abierto desafío al Estado y sus gobiernos neoliberales.

Montemayor omite, sin embargo, que acerca del “actual” EPR la sociedad mexicana sabemos poco, él es experto pero no dice nada respecto a la trayectoria poco exitosa del EPR en los últimos años que lo llevaron a varias escisiones, algunas de ellas basadas en argumentos políticos. Lofredo, por ejemplo, recuerda que en la primera escisión hubo una discusión con lo que sería el ERPI. “La principal diferencia estuvo relacionada con “la estrategia insurreccional que proclama (el EPR) y la cercanía con pueblos y comunidades, impulsando la toma de decisiones de las bases para realizar acciones militares”. Esta vez, no se sabe de alguna reorganización del EPR, se ignora si es la formación el inicial o hay un proyecto nuevo.

La primera fase del EPR fue una pero, ahora, pareciera que es otra y no está clara.

Los hechos ocurridos en las instalaciones de PEMEX son, de entrada, espectaculares. También son muy sensibles, no solo porque se trata de una industria emblemática para los mexicanos sino que, en ese sector se lleva a cabo una privatización furtiva acelerada, tratándose del gas natural, la petroquímica y el petróleo crudo.

Las recientes explosiones en Guanajuato y Querétaro, ¿no están dando pretexto al gobierno de la ultraderecha para profundizar la privatización?

Montemayor ha señalado la experiencia de las corporaciones petroleras en el mundo que las ha llevado a “reforzar” la “seguridad a ultranza” para saquear impunemente los recursos de los pueblos. En Africa, p.e. en Nigeria, es usual el uso de tropas militares para someter las protestas de los trabajadores y del pueblo; en Irak, hay en estos momentos más personal de las corporaciones privatizadoras (180 mil) que soldados de la coalición (160 mil). Muchos soldados son mercenarios pero, de los contratistas privados, la mayoría también son mercenarios.

Es conocido que, las petroleras imperialistas recurren a mercenarios con pretextos de garantizar la “seguridad”. En México, ¿no tomará el gobierno federal a las explosiones como el “timing” para hacer lo mismo que las demás petroleras del imperialismo?

Las “líneas de investigación” sugeridas por la inteligencia militar del Estado mexicano son, de entrada, preocupantes e inaceptables. Pretender involucrar a la APPO conduce no solamente a justificar la criminalización de la protesta social sino a darle autorización a Ulises Ruiz para que siga masacrando a los oaxaqueños. Lo peor, pretender

involucrar a “elementos radicales pertenecientes al sindicato de PEMEX” da cuenta de la perspectiva gorillesca de esos sectores de “inteligencia”. Sabido es que ese sindicato está al servicio de las transnacionales y de los gobiernos en turno. En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) NO hay “elementos radicales” porque, simplemente, NO existe ninguna actividad sindical, cualquier intento de protesta es violentamente reprimido. Así ha sido por más de medio siglo, desde el siguiente año a la expropiación petrolera (1938).

Por lo demás, en la evaluación de la significación política de los hechos conviene considerar la responsabilidad política y sus consecuencias. Si se estuviera ante un “invento” la situación sería extremadamente grave e implicaría el anuncio de la privatización militarizada de PEMEX.

Si la acción es verdadera, como sugiere Montemayor, la acción es espectacular y política pero tiene una gran limitación: es una acción al margen de las masas populares en lucha, la acción no impide sino favorece a los planes de privatización y militarización de PEMEX. Reducir la demanda a una sola, plenamente legítima pero reducida, ¿implica un avance para la lucha social de los mexicanos?



Vigilancia militar en Nuevo PEMEX, Tabasco